

## ¿HAY UN POPULISTA EN SU FUTURO?

Farid Kahhat

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

Que la mayoría de los partidos políticos en la mayor parte de América Latina no representan virtualmente a nadie es una afirmación tan cierta como trillada. Que ello se debe, al menos en parte, al ocaso de los viejos referentes de la política, y en particular al de la distinción ideológica entre derecha e izquierda, es una afirmación igualmente trillada, pero en realidad falsa: según el Latinobarómetro, la mayoría de los electores en América Latina no tiene reparos en ubicar su propia posición política dentro de un continuo que tiene como límites al radicalismo, tanto de derecha como de izquierda.

Unido ello a la inédita performance electoral de la izquierda sudamericana en los últimos años, la conclusión obvia parece ser que se estaría produciendo un viraje hacia la izquierda entre los electores de la región. Se trata de una conclusión tan obvia como equivocada: si bien América Latina posee un espectro político hemipléjico, ello se debe a que las personas que se ubican en algún lugar entre el centro y la derecha son una clara mayoría de los electores, y la izquierda se muestra más bien huérfana de adherentes.

La paradoja es evidente: el común de la gente no se proclama de izquierda, pero vota por quienes sí lo hacen. ¿Cómo explicar ese patrón de conducta? El Latinobarómetro no formula esa pregunta, por lo que habría que responderla apelando al sentido común: si muchos están dispuestos a votar por candidatos cuya posición política no comparten, tal vez su voto exprese su desilusión con el presente, antes que sus esperanzas de cara al futuro. Para entender a qué nos referimos, empecemos por revisar la forma en la que uno de los sistemas de partidos más sólido de la región se desvaneció sin dejar rastros: el bipartidismo del Partido Social Cristiano (COPEI) y Acción Democrática (AD) en Venezuela. Siguiendo una fórmula relativamente común (y relativamente impopular) en la región, cuando Carlos Andrés Pérez postuló a la presidencia de su país por segunda vez, desplegó durante la campaña un discurso populista y heterodoxo, que luego se convirtió en un ejercicio conservador y ortodoxo del gobierno. El problema aquí no solo radicaba en el engaño inicial, sino además en el hecho de que las políticas de ajuste estructural que intentó aplicar afectaban adversamente los intereses de amplios sectores de la población, al menos en el corto plazo.

La respuesta habitual era que, aunque inicialmente dolorosas, las reformas liberales en materia de economía eran el precio que se debía pagar para retomar la senda del crecimiento, y de un crecimiento que, a diferencia del pasado, fuera sostenible en el tiempo. El problema en Venezuela, por ende, habría sido que la receta no fue aplicada ni en la dosis debida ni durante el tiempo necesario para que surtiera el efecto deseado.

¿Pero qué ha ocurrido en aquellos países que sí lo hicieron? Pensemos en el sistema de partidos más longevo de la región, y, de hecho, uno de los más longevos del mundo: el uruguayo. El Partido Blanco y el Partido Colorado gobernaron en mancuerna el Uruguay durante la mayor parte del último siglo y medio. Durante buena parte del siglo XX, el sistema bipartidista tuvo entre sus bases de sustento una versión aclimatada del Estado de Bienestar. Cuando tanto blancos como colorados se abocaron en años recientes a desmontar algunos de sus programas, mientras simultáneamente padecían el «contagio» de la crisis argentina, un sistema de partidos que parecía esculpido en piedra empezó a crujiir como madera apolillada: la izquierda no solo les endilgó su primera derrota electoral en una elección nacional en 150 años, sino que además lo hizo con mayoría absoluta en primera vuelta.

Lo reconocía ya el propio Banco Mundial en un informe de 1998 cuyo título (verbigracia, Más allá del Consenso de Washington) no requiere mayor explicación: las reformas liberales han tenido resultados sensiblemente inferiores a los esperados. El crecimiento de las economías en América Latina promedió 3,3% anual durante la década de 1990 (muy por debajo de las cotas más elevadas del malhadado modelo de industrialización por sustitución de importaciones), los niveles de pobreza se mantuvieron incólumes y la desigualdad en la distribución del ingreso se elevó (no en forma significativa, es cierto, pero ese es un flaco consuelo en una región que ya era la más desigual del mundo).

Claro que la recomendación del Banco Mundial no era desandar el camino recorrido, sino perseverar en las reformas macroeconómicas, añadiendo la dimensión que faltaba: las reformas institucionales. Reformas que, por ejemplo, garantizaran un poder judicial independiente

del poder político y eficaz en el ejercicio de sus funciones, capaz, por ende, de garantizar la igualdad ciudadana ante la ley. Reformas en las que, huelga decirlo, el progreso ha sido más bien magro.

Dentro de esta veta, otro mea culpa digno de mención es el libro *Después del Consenso de Washington*, coeditado por John Williamson, autor precisamente de la celeberrima frase “Consenso de Washington”. Además de hacer hincapié en las reformas institucionales ya mencionadas, Williamson añade allí recomendaciones de política que pretenden reducir la vulnerabilidad de las economías de la región frente al impacto de las crisis internacionales. Lamentablemente, algunas de las recomendaciones basadas en la experiencia chilena (como el establecimiento de encajes para cierto tipo de flujos financieros provenientes del exterior) ya han sido abandonadas en el propio Chile.

El que la izquierda no haya necesitado desbrozar un camino propio hacia el gobierno plantea interrogantes sobre la naturaleza del mandato que ha obtenido de los electores en algunos países de la región. Las respuestas a esas interrogantes cubren un espectro que va desde Lula hasta Chávez. Pero se trata de una disyuntiva falaz, dado que las condiciones que permitieron el surgimiento del «chavismo» en Venezuela no tienen paralelo en ningún otro país de la región. Además de que Venezuela exporta su petróleo al triple del precio que obtenía a fines de la década pasada, sus recursos energéticos dan cuenta de un tercio del producto nacional, más de la mitad de los ingresos fiscales y un 70% de las exportaciones del país. A su vez, esos recursos están en lo esencial bajo el control de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA). En otras palabras, el gobierno venezolano posee un margen de maniobra en materia de política económica del que carece cualquier otro régimen de la región.

Si la Venezuela de Chávez es irreplicable como modelo, ¿qué cabría esperar del modelo representado por el gobierno de Lula? Por lo pronto, algunos prosélitos descorazonados del modelo actual esperan que, al estar menos comprometidas con los grupos de poder en sus respectivas sociedades, las fuerzas de la izquierda democrática lleven a cabo las reformas pendientes dentro de la agenda liberal. Por ejemplo, en un artículo reciente, Álvaro Vargas Llosa sostiene que «Muchas empresas privatizadas en los años noventa (los servicios telefónicos en México y Argentina, y la electricidad en el Perú) aún se encuentran bajo el control de monopolios que están confabulados con los reguladores públicos» (en perjuicio del consumidor, es de presumir).

Por otro lado, el hecho de que la gasolina en el Perú sea más cara que en algunos países de Europa revela un problema concomitante: dada la escasa recaudación que representan los impuestos directos, las finanzas públicas dependen en lo esencial de impuestos indirectos, que explican en buena medida el precio de la gasolina. Es cierto que incluso en países como Suecia se recurre cada vez más a los impuestos indirectos, pero se trata de un país en el que la presión tributaria representa cerca de un 55% del PIB, y con ella se financia una infinidad de programas sociales de cobertura universal. Se trata, además, de un país en el cual la recaudación se ha basado históricamente en impuestos directos y en una tributación progresiva. Es decir, la tendencia descrita solo revierte parcialmente un estado de cosas que no tiene paralelo en América Latina. El propio John Williamson, en el libro antes citado, sostiene que la tributación progresiva es el «clásico instrumento redistributivo», y que aunque los impuestos indirectos contribuyeron a ampliar la base tributaria en América Latina, debería ponerse un mayor énfasis en recaudar impuestos que gravan al patrimonio y la renta.

La mención a la función redistributiva que podría asumir el Estado se relaciona a su vez con lo que el propio Ricardo Lagos considera el mayor pasivo de su gobierno: el no haber podido reducir las desigualdades en la distribución del ingreso en Chile. El tema de la desigualdad de ingresos es un punto de divergencia entre socialistas y liberales: mientras para los socialistas disminuir la desigualdad de ingresos suele ser un fin en sí mismo, para la prédica liberal la única forma de equidad que el Estado debe garantizar es la igualdad de oportunidades. Es decir, las políticas públicas debían hacer posible que todo ciudadano pueda ascender en la estratificación social sobre la base de sus propios méritos. En esas condiciones, la desigualdad de ingresos sería legítima en tanto refleja la desigualdad de méritos entre los ciudadanos. Pero como sugieren estudios recientes sobre la sociedad estadounidense, desigualdades amplias y crecientes en la distribución del ingreso suelen reducir la movilidad social, haciendo escarnio de la idea de una estratificación social basada en el mérito personal. O, en otras palabras, la igualdad de oportunidades no dependería únicamente de la igualdad ciudadana ante la ley (como postulaba el liberalismo clásico), o incluso de la garantía por parte del Estado de condiciones mínimas de vida para el conjunto de la población (como postula el liberalismo moderno), sino además de una reducción en las desigualdades de ingreso (cuando menos en sociedades particularmente desiguales, como las nuestras). ■